



18 MAR 2019

Juan Pablo López Moreno Angélica María Carrón B Alejandro Castellanos L.

LOPEZ & ASOCIADOS ABOGADOS

Señor

JUEZ PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MANIZALES

E.

S.

D.

Ref.: Proceso Ordinario Laboral de Única Instancia de ANDRÉS FELIPE OROZCO RODRÍGUEZ contra, TELMEX COLOMBIA S.A. Y OTROS

Rad.: 2016 - 484

JONATAN TABARES ARBOLEDA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Pereira, abogado titulado, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado sustituto de TELMEX COLOMBIA S.A., conforme al poder que obra dentro del plenario, me permito presentar RECURSO DE REPOSICIÓN contra el auto de fecha 13 de marzo de 2019, notificado por estado No. 45 del día 14 de marzo de 2019, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas elaborada por la secretaría del Despacho:

Sustento el mencionado recurso en los siguientes términos:

De acuerdo con el numeral 4° del artículo 366 del Código General del Proceso "Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas", es decir, que la facultad del Juez para la tasación de las costas no es irrestricta, debido a que debe orientarse por los criterios legales, que a la fecha de presentación de la demanda, están condensados en el Acuerdo No. 1887 del 26 de junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Así ha sido corroborado por la Corte Constitucional, que en sentencia C-539 de 1999, con ponencia del Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, señaló:

"Las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.) y, de otro lado, las agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, las cuales - vale la pena precisarlo - se decretan en favor de la parte y no de su representante judicial. Aunque las agencias en derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los

382

criterios establecidos en el artículo 393-3 del Código de Procedimiento Civil (tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia o por el colegio de abogados del respectivo distrito y naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el representante judicial o la parte que litigó personalmente). Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado."

De otro lado, la misma Corporación, en sentencia C-089 de 2002, con ponencia del Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, precisó:

"Aun cuando el carácter de costas judiciales dependerá de la causa y razón que motivaron el gasto, y la forma en que se efectuó, su cuantificación está sujeta a criterios previamente establecidos por el legislador, quien expresamente dispuso que "solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación".

Ahora bien, el estatuto aplicable en la materia, de acuerdo con el proceso que se adelanta es el Acuerdo No. 1887 del 26 de junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, "por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho", el cual señala en su artículo 3°:

"Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previsto en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones"

Por su parte, en el numeral 2.1.1 del artículo 2.1 del mencionado Acuerdo, referido a las tarifas de agencias en derecho aplicables en los procesos ordinarios laborales en materia laboral, señala "Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto."

Siendo ello así, debe tenerse en cuenta, que la tasación de las costas impuestas a favor de la parte demandante, no se compadece con lo establecido en el Acuerdo 1887 de 2003, por las siguientes razones:

1. **Acerca de la naturaleza del proceso:** Se trata de un proceso ordinario laboral declarativo de única instancia, que tuvo su inicio en el mes de abril de 2016.
2. **Acerca de la calidad y duración útil de la gestión ejecutada:** Se ha tratado de una gestión diligente, responsable y permanente, desde el momento en que le fue notificado a mi representada el proceso judicial de la referencia, TELMEX COLOMBIA S.A., ha actuado siempre de conformidad con las normas procedimentales, atendiendo dentro de los términos establecidos los requerimientos del Despacho, así como la atención a las diligencias celebrada el día 01 de junio de

2017 en la cual se dio contestación a la demanda y la del 10 de septiembre de 2018 en la cual se llevó a cabo la audiencia de trámite y juzgamiento, sin haber presentado en ningún momento, aplazamiento u oposición a la fijación de las diligencias programadas por el Juzgado, sin que se haya tratado en ningún momento de dilatar el proceso, por el contrario se encuentra demostrada la gestión y la celeridad con la que se ha actuado en el curso del proceso, lo cual demuestra una gestión eficiente por parte de mi representada.

Es del caso precisar, que mi representada acudió a los mecanismos dispuestos por la Ley y llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianza S.A. para que, en caso de presentarse una condena desfavorable a sus intereses, quien estaba llamado al pago de dicha condena asumiera su posición en el litigo conforme la relación contractual pertinente. El anterior motivo no significa un interés de mi representada en dilatar el proceso, sino por el contrario que se garantizara que dentro del juicio se vele por el derecho al debido proceso para con mi representada.

3. **Acerca de la duración del proceso:** El proceso ordinario laboral tuvo una gestión de aproximadamente dos años corrido entre la fecha de la radicación de la demanda y la sentencia de única instancia, aclarando que este proceso se adelantó bajo la Ley 712 de 2001, razón por la cual se adelantó el 01 de junio de 2017 la audiencia en la cual se dio contestación a la demanda y la del 10 de septiembre de 2018 en la cual se llevó a cabo la audiencia de trámite.

En este punto es del caso recalcar que la extensión de la duración del proceso no correspondió de manera alguna al actuar de TELMEX COLOMBIA S.A., pues resultó ser el curso normal del proceso según lo determinó la propia administración de justicia de única instancia. Lo que lleva a demostrar que fue un proceso que tuvo una duración mínima y diligente por parte de mi representada.

Aunado a lo anterior, resulta indispensable indicar que mi representada siempre estuvo en plena disposición de asistir a la diligencia calendada por el Despacho.

4. **Acerca de las circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad:** Si bien es cierto, la parte demandante actuó a través de apoderado judicial dentro del proceso no obra prueba alguna en la que se demuestre algún tipo de gasto adicional en la que haya incurrido la parte demandante, razón por la que la condena en costas resulta ser totalmente desproporcionada en relación con los gastos asumidos por la defensa judicial. Por lo tanto, el Despacho desconoce en su totalidad los anteriores criterios establecidos en la Ley para la liquidación de las costas.

Al respecto, me permito llamar la atención al Despacho, en punto a la naturaleza y el propósito de las agencias en derecho, que corresponden a la contraprestación por los

gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses, en los términos de la Corte Constitucional, en sentencia C-539 de 1999.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que existen suficientes criterios que permiten establecer que la presente condena en costas a mi representada resulta excesiva y no cumple con lo establecido en el Acuerdo 1887 de 2003, pues NO se entiende como un proceso en el cual mi presentada ha sido diligente y célere, acarrea una condena de esa magnitud y menos aun cuando la liquidación en costas elaborada por el Juzgado excede notablemente el 20% de la condena, así:

CONDENA	VALOR
Cesantías	\$452.354 ✓
Intereses a las Cesantías	\$115.483 ✓
Prima de Servicios	\$102.268 ✓
Vacaciones	\$165.657 ✓
Indemnización por despido sin justa causa	\$19.919.427 ✓
Horas extras diurnas	\$4.455.574 ✓
Indemnización por no consignación de las cesantías	\$1.700.128 ✓
Indemnización por no pago oportuno de intereses a las cesantías	\$115.483 ✓
Indemnización Moratoria	\$28.121.544 ✓
TOTAL	\$55.147.418

Dando cumplimiento al Acuerdo N° 1887 de 2003, en el cual reitero, se establece que dentro de los procesos de única instancia las agencias en derechos serán hasta el veinte por ciento (20%) de las pretensiones reconocidas a todos los vencidos en juicio, se tiene lo siguiente:

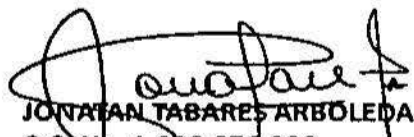
CONDENA	VALOR
Condena	\$55.147.418
20% de la condena	\$11.029.483
Costas liquidadas por el Despacho	\$12.073.800

PETICIÓN.

386
385

Como consecuencia de los anteriores fundamentos respetuosamente solicito al Despacho se sirva MODIFICAR por vía de la reposición, el auto de fecha 13 de marzo de 2019, notificado por estado No. 45 del día 14 de marzo de 2019, con base en los argumentos expuestos, de conformidad con el numeral 2º del artículo 62 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en consecuencia tasar nuevamente las agencias y disminuir las agencias en derecho a cargo de mi representada.

Cordialmente,


JONATHAN TABARES ARBOLEDA
C.C. No. 1.090.076.966
T.P. No. 294.781 del C.S. de la J